

Antón Costas

Retóricas de intransigencia

(*La Vanguardia*, 20 de septiembre de 2017).

Qué tiempos estos extraños en los que hay que tener más coraje para ser moderado que radical o conservador! Hay un hostigamiento creciente a todos aquellos que mantienen una postura moderada en defensa de la convivencia cívica. Desde un lado, los moderados son acusados de “equidistantes” y tibios; desde el otro se les niega la condición de ciudadanos y se les acusa de botiflers y no patriotas. “Hay que tomar partido”, les dicen. ¡Como si defender la moderación y resistirse a las retóricas intransigentes no lo fuera!

Esas retóricas tienen su raíz en una mirada de incompreensión y rechazo del otro: “¿Cómo pueden ser así?”, piensan los unos de los otros. Y alimentan una lógica diabólica que aplica a la vida política la tercera ley de Newton: a toda acción se opone otra fuerza de igual intensidad y sentido contrario llamada reacción. Esta lógica acción-reacción se va a intensificar hasta el 1-O y más allá. La secuencia posiblemente seguirá estos cinco pasos:

Primero. A la acción palaciega-parlamentaria independentista que busca crear una legalidad alternativa de corte revolucionario –en el sentido de alteración radical del orden legal y constitucional vigente–, ha respondido (como era previsible y de esperar) el Estado con toda su artillería legal y fáctica. Pero esta reacción comporta algunos excesos, como ya estamos viendo. Excesos que, a su vez, provocarán nuevas acciones de respuesta.

Segundo. La confrontación de esas dos legalidades se decantará por la constitucional. Ya sea por convicción democrática o por temor, fiscales, jueces, policías y demás funcionarios acatarán la legalidad constitucional, no la revolucionaria. Las instituciones comunitarias e internacionales, así como los gobiernos de la UE, apoyarán el principio de legalidad del Estado de derecho. Por lo tanto, el referéndum vinculante no se celebrará tal como se pretendía.

Tercero. Los independentistas no pueden aceptar ese fracaso. La frustración que provocaría el hacerlo significaría un fuerte castigo en próximas elecciones. La reacción vendrá a través de las movilizaciones, antes y en el propio 1-O. Tienen que demostrar que el apoyo a la independencia es ahora tan fuerte o más que en el 9-N.

Cuarto. Tanto si se logra ese objetivo como si no, se verán tentados a declarar la independencia. Han ido muy lejos y muy rápido como para poder ahora frenar. La idea de que las revoluciones se legitiman por su éxito es un estímulo poderoso. Puede ocurrir mediante una decisión parlamentaria o, metafóricamente, al estilo de Companys: saliendo al balcón de la plaza Sant Jaume. El vértigo que sentirá el presidente Puigdemont será fuerte. Pero la excitación de la adrenalina puede compensarlo. Y más cuando su objetivo no es permanecer en política sino declarar la independencia.

Quinto. De producirse esa acción unilateral, dará lugar a una reacción inmediata y posiblemente nada sutil del Estado, con consecuencias políticas y penales. El paso siguiente será la convocatoria de elecciones autonómicas. Pero no cabe descartar que también las generales. A partir de ahí es más difícil pronosticar nada.

En cualquier caso, estas retóricas intransigentes y lógicas de acción-reacción

traen consigo lo que los clásicos de la economía y el pensamiento político llamaron los “efectos no previstos de las decisiones humanas”. Efectos que no por ser no deseados dejan de ser más reales. Entre esas consecuencias hay algunas episódicas y otras permanentes.

Entre las primeras está el hostigamiento y la violencia contra los moderados. Los más afectados serán los alcaldes, concejales y dirigentes socialistas.

Entre los efectos duraderos destacan dos. Uno es el sentimiento de fracaso histórico y la pérdida de autoestima que se inoculará en la sociedad española durante mucho tiempo por falta de un relato cohesionador. Un sentimiento del que son responsables aquellos que no quieren que Catalunya se separe de España, pero tampoco atienden las aspiraciones de un mejor autogobierno y la demanda mayoritaria de un referéndum sobre cómo articular esa relación. El otro efecto es la división social y la quiebra de la convivencia cívica en Catalunya. Una división de la que son responsables los independentistas al negar el pluralismo político, romper las reglas de la democracia parlamentaria y actuar como si tuviesen mayoría social.

Tenemos que salir de esta diabólica dinámica de acción-reacción. Por un lado, hay que volver a las urnas para saber cuáles son las preferencias políticas de los catalanes tras cinco años de retóricas intransigentes. Por otro, necesitamos una política más amable con la democracia. Una política en la que las propuestas de cambio de los moderados han de desempeñar un papel esencial en la gestión del conflicto y en el mantenimiento de la convivencia cívica.